

*Comisión elegida para la presentación de la ponencia:* Género y Derecho de Familia.

*Tema:* La transgresión de la perspectiva de género en los proyectos de divorcio administrativo.

*Autora:* Julieta Elisabet Benitez , T° XVI F° 538 del Colegio de Abogados de Morón.

*Domicilio:* Lainez 1501, ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

*Teléfono:* 011 2253 4361

*Correo electrónico:* [jebenitez@derecho.uba.ar](mailto:jebenitez@derecho.uba.ar)

**Abstract:** Este trabajo analiza los proyectos de divorcio administrativo en Argentina, los cuales buscan desjudicializar los divorcios para simplificar los trámites. Aunque se presentan como medidas eficientes, generan preocupaciones sobre la vulneración de los derechos económicos y patrimoniales de las mujeres, quienes frecuentemente enfrentan desventajas tras el divorcio debido a su rol en el trabajo doméstico y de cuidado. La eliminación de la intervención judicial pone en riesgo la protección de los derechos humanos, ya que se debilitan mecanismos clave para abordar la violencia económica y garantizar la equidad. Se argumenta que, para proteger adecuadamente los derechos de las partes vulnerables, es necesario reforzar la intervención judicial y ofrecer asesoramiento legal gratuito. La discusión debe ir más allá de la eficiencia administrativa, priorizando la equidad de género y la justicia material.

## **La transgresión de la perspectiva de género en los proyectos de divorcio administrativo.**

La implementación del divorcio administrativo en Argentina ha generado un profundo debate en el ámbito jurídico, al proponer desjudicializar los divorcios y reducir la burocracia mediante un órgano administrativo. Aunque se plantea como una medida ágil y eficiente, es necesario evaluar su impacto desde una perspectiva de género y jurídica más amplia.

Diferentes Colegios de Abogados han expresado fuertes críticas<sup>1</sup> a esta reforma, destacando que, al eliminar la intervención judicial, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de la parte más débil en el matrimonio. Este enfoque desconoce la integralidad del divorcio que establece que no solo abarca la disolución del vínculo, sino también aspectos patrimoniales, el régimen de cuidado de los hijos y compensaciones económicas, los cuales son esenciales para garantizar una protección adecuada<sup>2</sup>.

Sin la intervención de abogados, los cónyuges, en especial las mujeres, corren el riesgo de no comprender los derechos a los que podrían renunciar, como la compensación económica o los alimentos post divorcio, aumentando su vulnerabilidad económica y legal. En ese sentido, históricamente, las mujeres han sido relegadas al trabajo doméstico no remunerado y al cuidado de los hijos, lo que las coloca en desventaja económica tras el divorcio. La necesidad de asesoramiento profesional no es solo un trámite burocrático, sino una garantía fundamental de que se protegerán los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.

La hipótesis de este trabajo sostiene que, al desatender las dinámicas de poder y las desigualdades en el hogar, los proyectos de divorcio administrativo consolidan brechas preexistentes, comprometiendo tanto los avances legislativos en Argentina en materia de

---

<sup>1</sup>Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Colegio de Abogados de Azul, Colegio de Abogados de Mar del Plata, Colegio de Abogados de Neuquén, Colegio de Abogados de Salta, Colegio de Abogados de Jujuy, y Colegio de Abogados de Zárate-Campana (2024) *Rechazo al proyecto de ley sobre divorcios administrativos*. Recuperado de: [cpacf.org.ar/noticia](http://cpacf.org.ar/noticia); [colegioabogadosazul.org.ar/nota](http://colegioabogadosazul.org.ar/nota); [camdp.org.ar/rechazo](http://camdp.org.ar/rechazo); [abognqn.org/rechazo](http://abognqn.org/rechazo); [abogadosdesalta.org.ar/rechazo](http://abogadosdesalta.org.ar/rechazo); [colabogadosjujuy.com/comunicado](http://colabogadosjujuy.com/comunicado); [cazc.org.ar/noticia](http://cazc.org.ar/noticia)

<sup>2</sup>Artículo 438 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina (2014) Ley 26.994.

género como en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, al no garantizar una protección adecuada de los derechos patrimoniales y económicos de las personas más vulnerables.

### **Marco teórico**

La perspectiva de género permite identificar y abordar las desigualdades entre mujeres y hombres, reconociendo las relaciones de poder que perpetúan la discriminación. Este enfoque es clave en las políticas públicas, ya que asegura que las decisiones consideren estas desigualdades para erradicarlas. En el derecho de familia, este enfoque es crucial para garantizar la equidad en temas como el divorcio, la distribución de bienes y la responsabilidad parental<sup>3</sup>.

La Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres exige la adopción de una perspectiva de género en todos los ámbitos, incluida la esfera familiar. Sin embargo, persisten vacíos en su aplicación, especialmente en la distribución de bienes y la compensación económica tras el divorcio<sup>4</sup>, perpetuando desigualdades como la violencia económica y la vulnerabilidad patrimonial<sup>5</sup>. Argentina ha asumido compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que deben reflejarse en su legislación. Cualquier proyecto de divorcio que contradiga estos tratados puede ser declarado inconstitucional, por lo que las propuestas deben alinearse con estos compromisos para evitar vulnerar los derechos de las mujeres tras la disolución del matrimonio<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Suárez Tomé, D., & Maffía, D. (Comps.) (2020) *Intervenciones feministas para la igualdad y la justicia*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbares

<sup>4</sup>Seda, J. A. (2018) *Manual de Derecho de Familia*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbares.

<sup>5</sup>Red Mujer y Hábitat de América Latina (2009) *Mujeres en la ciudad: De violencias y derechos*. Santiago de Chile, Ediciones SUR.

<sup>6</sup>Benavente Riquelme, M. C., y Valdés Barrientos, A. (2014) *Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres*, Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Asimismo, la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 introdujo avances significativos, como la eliminación de la necesidad de expresar una causa para solicitar el divorcio, lo que representa un progreso en términos de autonomía personal<sup>7</sup>. Además, permite la compensación económica en casos de desequilibrio patrimonial entre los cónyuges<sup>8</sup>, aunque su aplicación depende del análisis judicial, lo que puede llevar a decisiones desiguales si no se aplica una perspectiva de género adecuada.

No obstante, no hay normativa que contemple explícitamente el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como una contribución económica que deba valorarse en la partición de bienes. En cuanto a la responsabilidad parental, aunque se promueve la coparentalidad, en la práctica, la mayor parte del cuidado de los hijos sigue recayendo sobre las mujeres<sup>9</sup>, perpetuando su desventaja económica y social.

### **Proyectos de divorcio administrativo**

El proyecto presentado por la Diputada Eugenia Alienello en septiembre de 2023<sup>10</sup> propone la posibilidad de realizar el divorcio a través de un proceso administrativo, facilitado por un oficial público del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esto se incorporaría al Código Civil y Comercial mediante el artículo 435, inciso d), que establece que los cónyuges, de mutuo acuerdo, pueden solicitar el divorcio ante un órgano administrativo. Para ello, deben cumplir ciertos requisitos, tales como no tener hijos matrimoniales menores de edad o incapaces, no existir bienes registrables comunes o gananciales, no existir pretensión alimentaria entre los cónyuges ni compensación económica.

---

<sup>7</sup>Aón, L. C., & Méndez, R. A. (2016) *Aspectos procesales del divorcio*. Ediciones Jurídicas. Disponible en [saij.gob.ar/aspectosprocesales-divorcio](http://saij.gob.ar/aspectosprocesales-divorcio)

<sup>8</sup>Artículo 441 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina (2014) Ley 26.994.

<sup>9</sup>Fund.ar (2024) *¿Qué hace el Estado por vos? Todo sobre ser madre en Argentina*. Recuperado de [fund.ar/publicacion](http://fund.ar/publicacion)

<sup>10</sup>Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2023) *Proyecto de ley 3287-D-2023*. Disponible en [hcdn.gob.ar](http://hcdn.gob.ar)

Sin embargo, estos proyectos presentan riesgos conceptuales y estructurales que afectan principalmente a las mujeres. Por ejemplo, la eliminación de la intervención judicial y la falta de claridad sobre las contribuciones no monetarias, en este sentido, agravan las desigualdades económicas.

En el proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, presentado en diciembre del 2023, el cual tiene un enfoque amplio sobre diversas reformas administrativas y legales, con una clara intención de desjudicializar ciertos procesos, hace una breve mención al divorcio administrativo proponiendo la misma incorporación al artículo 435 del Código Civil y Comercial<sup>11</sup>. Esta incorporación establece que la comunicación de la voluntad de disolver el vínculo puede presentarse por ambos cónyuges de manera conjunta ante un órgano administrativo, y tendrá los mismos efectos que un divorcio judicial. La diferencia con el proyecto de la Diputada Alienello es que no precisa detalladamente los requisitos a cumplir ante este trámite, lo que agrava la legalidad que amerita un proceso jurídico como el debatido.

Por último, el proyecto<sup>12</sup> más reciente, presentado el 10 de octubre de 2024, sigue la misma línea que los anteriores y propone modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación para incorporar el divorcio en sede administrativa como una causal de disolución del matrimonio de parejas sin hijos menores o incapaces, sin bienes comunes o gananciales, y sin pretensiones alimentarias ni compensaciones económicas, con el fin de simplificar el trámite del divorcio. El objetivo, según se establece, de esta propuesta es aliviar la carga sobre el sistema judicial, reducir los costos y el tiempo del proceso, y otorgar mayor libertad a las partes para finalizar su matrimonio de manera más simple y accesible.

---

<sup>11</sup> “Capítulo III - Código Civil y Comercial (Ley N° 26.994) ARTÍCULO 352.- Incorpórase como inciso d) del artículo 435 del Código Civil y Comercial aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, el siguiente: “d) comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio.”

<sup>12</sup> Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2024) *Proyecto de ley 0019-PE-2024*. Disponible en [hcdn.gob.ar/proyecto](https://hcdn.gob.ar/proyecto)

## **La vulneración de la perspectiva de género**

La perspectiva de género en el ámbito jurídico implica incorporar un enfoque que reconozca y aborde las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, así como las diferentes formas de discriminación que enfrentan las personas en función de su género<sup>13</sup>. En el derecho, esto significa garantizar que las normas, procedimientos y decisiones legales tengan en cuenta cómo las leyes pueden afectar de manera desproporcionada a las mujeres y a otros grupos vulnerables, y buscar eliminar los sesgos y estereotipos que perpetúan dichas desigualdades.

Es necesario destacar que la perspectiva de género en el ámbito del divorcio administrativo debe ser aplicada no solo para evaluar la distribución de bienes o el reconocimiento de compensaciones, sino también para garantizar el acceso igualitario a la justicia.

La eliminación de la intervención judicial en los proyectos de divorcio administrativo propuestos tiene un impacto directo en las mujeres, quienes, como ya se mencionó, continúan asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado del hogar. Esto perpetúa las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres en Argentina, especialmente aquellas que lideran hogares monomarentales, donde los niveles de pobreza son significativamente más altos que en otros tipos de hogares.

Según UNICEF, en los hogares liderados por mujeres, la pobreza infantil alcanza el 65%, y en los hogares monomarentales llega al 66.9%, en comparación con el 53.3% en hogares liderados por varones<sup>14</sup>. Además, las mujeres en estos hogares enfrentan más dificultades para cubrir los gastos básicos. En un 56% de los hogares con jefatura femenina y un 59% de los hogares monomarentales, se tuvo que dejar de comprar alimentos esenciales debido a la falta

---

<sup>13</sup>Nelly Minyersky, en el libro *Miradas feministas sobre los derechos*, nos habla de la necesidad del enfoque “con perspectiva de género, que no constituye sólo una posibilidad de elección, sino que surge de un mandato emanado de los Tratados de Derechos Humanos que fueron incorporados en la Constitución Nacional, principalmente en la CEDAW, en especial sus artículos 1, 12, 16, etcétera” (Minyersky, 2019, p. 71).

<sup>14</sup>UNICEF Argentina (2024) *Situación de los hogares liderados por mujeres*. Disponible en [unicef.org/informe](https://unicef.org/informe)

de recursos<sup>15</sup>. Estas estadísticas reflejan cómo la eliminación de la figura del juez en los procesos de divorcio podría agravar aún más la situación de las mujeres que dependen económicamente de sus cónyuges, ya que se priva a las mujeres de una instancia imparcial que podría equilibrar las negociaciones y proteger sus derechos económicos.

La mediación judicial es fundamental para analizar dinámicas familiares complejas y la detección de situaciones de violencia de género y violencia económica. En este contexto, en el primer semestre de 2024, se recibieron 8.367 denuncias, de las cuales el 76% fueron presentadas por mujeres<sup>16</sup>. Estas cifras subrayan la importancia de contar con una intervención judicial que permita identificar y abordar situaciones de vulnerabilidad que podrían pasar desapercibidas en procesos de divorcio administrativo sin la supervisión adecuada.

## **Conclusiones**

Los proyectos de divorcio administrativo, en su formulación actual, presentan serias deficiencias conceptuales y técnicas que pueden profundizar las desigualdades estructurales existentes. Al no diferenciar adecuadamente entre bienes comunes y gananciales, se genera una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos patrimoniales de los cónyuges, especialmente de las mujeres, cuyas contribuciones no monetarias al hogar son frecuentemente ignoradas en los acuerdos de disolución. Esta ambigüedad normativa no solo compromete la seguridad jurídica, sino que perpetúa la desigualdad económica, afectando negativamente a quienes han asumido la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidado.

La simplificación que proponen estas iniciativas legislativas, bajo el argumento de aliviar la sobrecarga del sistema judicial, revela una mirada reduccionista que no aborda las complejas dinámicas de poder que subyacen en muchos divorcios. Es erróneo señalar a los procesos de divorcio como la causa del colapso del sistema de justicia, cuando en realidad la

---

<sup>15</sup>UNICEF Argentina (2024) *Situación de los hogares liderados por mujeres*. Disponible en [unicef.org/informe](https://www.unicef.org/informe)

<sup>16</sup>Corte Suprema de Justicia de la Nación (2024) *Datos estadísticos sobre la violencia doméstica: Primer semestre de 2024*. Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN [csjn.gov.ar/novedades](https://csjn.gov.ar/novedades)

problemática reside en la falta de recursos y en la necesidad de reformas más profundas. En lugar de eliminar la intervención judicial, es fundamental fortalecerla con mecanismos que garanticen una revisión adecuada desde una perspectiva de género, especialmente en casos donde se detecten desequilibrios patrimoniales significativos o indicios de violencia económica.

Una legislación que omita la necesidad de una evaluación judicial en los procesos de divorcio vulnera los principios de igualdad y protección integral consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental que cualquier propuesta de divorcio administrativo incluya salvaguardias específicas, como protocolos de protección para las partes en situación de vulnerabilidad y mecanismos de revisión judicial en casos donde no se garantice la equidad patrimonial. Además, se debe implementar un sistema de asesoramiento legal gratuito para las mujeres que atraviesen estos procesos, asegurando que cuenten con la orientación necesaria para comprender sus derechos y las posibles consecuencias de los acuerdos a los que lleguen. Sin embargo, estos proyectos pierden su propósito, ya que, lejos de reducir costos para la administración y los ciudadanos, requerirían recursos adicionales para implementar dichos mecanismos y asegurar la protección efectiva de los derechos.

En definitiva, la discusión sobre la reforma del sistema de divorcios en Argentina no puede centrarse en la desjudicialización como un fin en sí mismo. La verdadera transformación requiere un enfoque integral que contemple no solo la eficiencia administrativa, sino la justicia material y la equidad de género, asegurando que todos los actores tengan acceso a un proceso que proteja efectivamente sus derechos.



**Propuestas:**

**a. Rechazo de los proyectos de divorcio administrativo:** Los proyectos de divorcio administrativo deben ser rechazados en su totalidad, ya que presentan graves deficiencias al no garantizar la protección de los derechos económicos y patrimoniales de las mujeres.

**b. Adopción de la Ley Micaela por parte de los Colegios de Abogados para la capacitación en perspectiva de género:** Instar a nuestros Colegios a que adopten e implementen de manera obligatoria la capacitación en perspectiva de género, conforme a la Ley Micaela N.º 27.499.

Esto es para concientizar a nuestros colegas sobre la importancia de la aplicación efectiva de la perspectiva de género en todos los casos, en particular en los de disolución del matrimonio, y también para advertir sobre este enfoque respecto de los proyectos de divorcios administrativos. Esta medida fortalecería la protección de los derechos de las personas en situación de desventaja y contribuirá a la justicia material en el derecho de familia.

## **Bibliografía**

- Aón, L. C., & Méndez, R. A. (2016) *Aspectos procesales del divorcio*. Ediciones Jurídicas. Disponible en [saij.gob.ar/aspectosprocesales-divorcio](http://saij.gob.ar/aspectosprocesales-divorcio)
- Benavente Riquelme, M. C., y Valdés Barrientos, A. (2014) *Políticas públicas para la igualdad de género: un aporte a la autonomía de las mujeres*, Libros de la CEPAL, N° 130 (LC/G.2620-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Bergallo, P., & Moreno, A. (Coords.) (2017) *Hacia políticas judiciales de género*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbares.
- Código Civil y Comercial de la Nación argentina (2014) Ley 26.994.
- Pecheny, M., Moreno, A., Maffía, D., & Gómez, P. L. (Comps.). (2019). *Miradas feministas sobre derechos* (1ª ed.). Editorial Jusbares. <https://www.editorialjusbares.gob.ar/pdf/miradasfeministas>
- Red Mujer y Hábitat de América Latina (2009) *Mujeres en la ciudad: De violencias y derechos*. Santiago de Chile, Ediciones SUR.
- Seda, J. A. (2018) *Manual de Derecho de Familia*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbares.
- Suárez Tomé, D., & Maffía, D. (Comps.) (2020) *Intervenciones feministas para la igualdad y la justicia*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbares
- UNICEF Argentina (2024) *Situación de los hogares liderados por mujeres*. Disponible en [unicef.org/informe](https://unicef.org/informe)